



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Astrid de los Ángeles Ruiz Sánchez
LITISCONSORTE	Jhonatan Restrepo Ruiz
INTERVINIENTE	Yohanna Nataly Medina Mira
DEMANDADO	Protección S.A.
RADICADO	05-001-31-05-005-2019-00092
TEMA	Pensión de sobrevivientes
DECISIÓN	Confirma sentencia

El veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **189** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia dentro del proceso ordinario promovido por **ASTRID DE LOS ÁNGELES RUIZ SÁNCHEZ** contra la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, en donde se integró como interviniente ad excludendum a la señora **YOHANNA NATALY MEDINA MIRA**, y como litisconsorte necesario por activa al señor **JHONATAN RESTREPO RUIZ**, en el proceso con radicado **05-001-31-05-005-2019-00092**.

• **PRETENSIONES:**

La demandante pretende se ordene a **PROTECCIÓN S.A.** a reconocer y pagar la pensión de sobreviviente con ocasión al fallecimiento de su cónyuge **WILSON ALBERTO RESTREPO SÁNCHEZ.**, desde el 21 de mayo de 2018 de manera indexada y a las costas procesales.

• **HECHOS:**

Como fundamento de las pretensiones manifiesta que contrajo matrimonio con el señor WILSON ALBERTO RESTREPO SÁNCHEZ el 29 de junio 2002, vínculo del cual nació JHONATAN RESTREPO RUIZ, quien ya es mayor de edad. Que el señor WILSON ALBERTO RESTREPO SÁNCHEZ falleció el 21 de mayo de 2018 y para la fecha se encontraba trabajando como conductor en COOPETRANSA y estaba afiliado a PROTECCIÓN S.A. Y que el 27 de julio de 2018, presentó ante PROTECCIÓN S.A. reclamación de la pensión de vejez en calidad de conyugue del causante, y el 19 de diciembre de 2018 le fue negada con el argumento de que la señora YOHANNA NATALY MEDINA MIRA también se había presentado como beneficiaria de este derecho en calidad de compañera permanente, calidad que desconoce.

- **CONTESTACIÓN:**

✓ PROTECCIÓN S.A.:

Procedió a dar respuesta a la demanda manifestando que no le consta la relación conyugal entre la demandante y el causante, ni el hijo que surgió de esa unión. Que es cierto que el señor WILSON ALBERTO RESTREPO SÁNCHEZ falleció el 21 de mayo de 2018 y que para el momento de su muerte se encontraba afiliado a PROTECCIÓN S.A. Y que la demandante presentó la reclamación de pensión de sobreviviente el 21 de septiembre de 2018 y como respuesta a esta, se le indicó del conflicto existente entre dos posibles beneficiarias. Se opuso a las pretensiones, y como excepciones planteó la de buena fe, hecho exclusivo de un tercero y prescripción.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 4 de septiembre de 2020, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** probada la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de sobrevivencia, argumentando que la demandante tenía la obligación de probar la convivencia de 5 años con el causante, y el proceso careció de pruebas para ello.

ABSOLVIÓ a PROTECCIÓN S.A. de todas las pretensiones de la demanda.

Y, **CONDENÓ** en costas procesales a la actora y en favor de PROTECCIÓN S.A.

- **APELACIÓN:**

- ✓ DEMANDANTE:

La anterior decisión fue recurrida por la apoderada de la parte actora, la cual manifestó que el vínculo conyugal entre la demandante y WILSON ALBERTO RESTREPO SÁNCHEZ sí existió y estuvo vigente hasta la fecha del fallecimiento de este último. Que a pesar de las inconsistencias, sí se probó más de 5 años de vínculo matrimonial y extramatrimonial, igualmente se probó la ayuda mutua que existió entre la demandante y el causante. Que la demandante fue clara cuando manifestó que el vínculo sentimental terminó, pero siguieron casados y a pesar de que la convivencia terminó, esta sí se dio por más de 5 años. Y que como lo indicó el empleador del causante, los beneficiarios de este eran la demandante y su hijo, por lo cual se evidencia la protección, socorro y ayuda mutua por parte del causante en todo momento a su núcleo familiar.

- **ALEGATOS:**

- ✓ PROTECCIÓN S.A.:

Solicita se confirme la sentencia de primera instancia, toda vez que la convivencia es un requisito de obligatoria observancia, el cual no fue probado por la parte demandante, pues la testigo presentada en el proceso exhibió poco conocimiento antes las preguntas realizadas que comprendían fechas, lugares de convivencia, relación de pareja, entre otros temas de relevancia.

- ✓ DEMANDANTE:

Señaló en sus alegatos que quedó demostrado que entre la demandante y su cónyuge fallecido hubo una convivencia permanente, singular y de ayuda mutua por mucho más de 5 años. Que si bien es cierto que las declaraciones

extrajuicio aportadas incurren en algunas de las incongruencias indicadas por el juez de primera instancia, es claro que las mismas obedecen a un error en la transcripción de su contenido, pues como bien es sabido, las notarías del país tienen pre-formas o minutas para dichos documentos, lo que pudo generar el impase. Indicó que el juez desechó casi en su totalidad todas las demás pruebas que fueron aportadas y practicadas, toda vez que, de ser analizadas en conjunto no se hubiese llegado a otra conclusión distinta a la que sí hubo convivencia. Por lo anterior, solicita se revoque la sentencia de primera instancia.

- **DECRETO 806 DE 2020:**

Atendiendo a lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

CONSIDERACIONES

No se discute que mediante comunicado del 19 de diciembre de 2018, PROTECCIÓN S.A. argumentó a la demandante la necesidad de acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral, para que fuera esta quien decidiera quién acreditaba la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, ya que ante la entidad se presentó la señora YOHANNA NATALY MEDINA MIRA solicitando la misma prestación económica. (Folio 77).

El ***problema jurídico*** a resolver radica en determinar, si la demandante acredita el requisitos de convivencia con el afiliado fallecido, para ser beneficiaria de la prestación económica de sobrevivientes.

Está probado con el registro civil de matrimonio de folios 16 y 17 de la demanda digital, que la actora y el señor RESTREPO SÁNCHEZ, contrajeron nupcias el 29 de junio de 2002, y que para la fecha de la muerte del afiliado

aún estaba vigente el vínculo matrimonial y sin nota marginal de cesación de efectos civiles de matrimonio católico.

De igual forma, se acreditó con el registro civil de defunción de folios 14 y 15 de la demanda digital el fallecimiento del señor WILSON ALBERTO RESTREPO SÁNCHEZ, hecho ocurrió el 21 de mayo de 2018.

Teniendo en cuenta lo anterior, la normatividad aplicable frente a los requisitos exigidos para los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, es la consagrada en el artículo 74 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, el cual expresa que será beneficiario de la pensión de sobreviviente el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite que acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte.

Ahora, esta Sala para darle solución al problema jurídico, analizó detenidamente la prueba testimonial y documental, de la cual se pudo concluir lo siguiente:

En cuando al interrogatorio de parte, lo primero que cabe señalar, es que existe un principio universal, el cual señala que la prueba no puede ser creada por quien la invoca, lo que quiere decir que la demandante no puede crear su propia prueba para luego valerse, sacar provecho o beneficio de la misma, pues es indiscutible no solo la presunción sino la convicción de la existencia de situaciones que afectan su credibilidad e imparcialidad.

Conforme a lo anterior, es necesario advertir que la demandante mostró cierto grado de inseguridad, lo cual generó desconfianza a la Sala, en cuanto a la convivencia con el afiliado fallecido, ya que señaló que convivió con el señor RESTREPO SÁNCHEZ, por espacio de 16 años luego del matrimonio, pero que se separó de él, 2 meses antes de la muerte, debido a que tenía que viajar mucho y por tal razón pasaba mucho tiempo fuera de la casa, no obstante, ante las preguntas realizadas por el juez, esta modifica lo antes dicho, y expresa que para la muerte de su cónyuge, llevaba un año de haberse separado sentimentalmente. Dicha separación, tampoco concuerda con la declaración extrajuicio aportada con la demanda, en donde ella manifiesta que

llevaba separada de él desde el año 2010. Finalmente, expresó que el causante convivió los últimos meses con sus hermanos, y que no tiene conocimiento de una posible convivencia entre el causante y la señora YOHANNA NATALY MEDINA MIRA.

Al proceso, sólo fue traída la testigo PAULA ANDREA GIL MOSCOSO, la cual, en su declaración manifestó ser amiga de la demandante, señalando que la señora RUIZ SÁNCHEZ y el señor RESTREPO SÁNCHEZ, continuaban casados para el momento de la muerte del afiliado, pero que se habían separado unos meses antes de la muerte, pero que no recuerda las fechas exactas de inicio y final de la convivencia. Indicó que no se ratifica en la declaración extrajuicio aportada, porque no recuerda haber visto lo que estaba ahí consagrado cuando lo firmó, lo cual puede ser un error de redacción. Y que manifestó que desde que los conoció siempre vivieron en Caldas, lo cual se contradice con la manifestado por la demandante, ya que esta fue clara al señalar que tuvieron varios domicilios, dentro de los que señaló el municipio de Caldas, pero que su último domicilio fue en el Barrio Cristo Rey.

Pues bien, analizada la prueba testimonial junto con la prueba documental, esta Sala no desconoce que existe un vínculo matrimonial vigente para la fecha de la muerte, sin embargo, no hay material probatorio que de convicción y certeza, para acreditar el requisito de convivencia para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, ya que si bien hay claridad frente la fecha en que iniciaron su convivencia a raíz de su matrimonio, no quedó demostrado cuánto fue el término de duración de la misma, haciendo claridad que si bien tuvieron un hijo, este fue mucho antes del vínculo matrimonial, no pudiéndose presumir la convivencia por solo hecho.

De igual forma, debe manifestarse que si bien la empresa COOPETRANSA, dio respuesta al oficio N° 468, manifestando que las personas que figuraban en la hoja de vida del afiliado fallecido era la demandante y su hijo, dicho documento no es determinante para acreditar la convivencia, que es lo que se examina en el presente caso.

De acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le brinden convicción. Así pues, en el presente caso, el juez como director del proceso puede apreciar y valorar con un criterio de conciencia cualquier prueba decretada dentro del proceso, como ya se dijo, según las reglas de la sana crítica.

De lo anterior se desprende que, del análisis de todo el acervo probatorio, no se demuestra que haya existido entre la demandante y el causante, dentro del término establecido por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, una convivencia real y efectiva que entrañe una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común, como lo ha indicado la Sala del Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en especial, en sentencia 63640 del 4 de julio de 2018, pues la única testigo no genera la suficiente credibilidad para probar tal hecho.

Teniendo en cuenta los razonamientos anteriores y lo indicado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL10118-2015, el juzgador fundamentará su decisión en los elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico. Por ello, al no probarse la convivencia que exige la ley 797 de 2003, la demandante no puede ser considerada como beneficiaria de la pensión deprecada, por lo que la sentencia de instancia merece ser **CONFIRMADA** íntegramente.

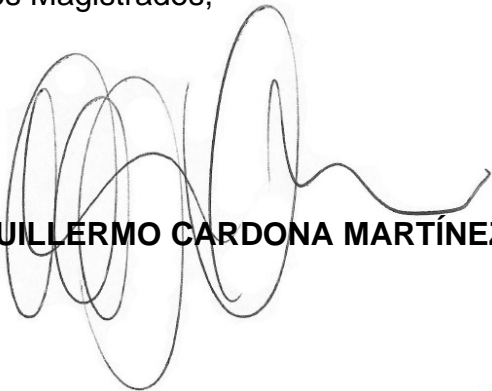
Las costas procesales de la primera instancia como lo dijo el juez. Las de la segunda instancia son a cargo de la parte actora por no salir avante el recurso de apelación. Las agencias en derecho de esta instancia se tasan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia que se revisa por vía de apelación de fecha y providencia conocida.

Costas y agencias en derecho como se dejó dicho.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 113 del 30 de junio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>